



» Hernán Vallejo, del consejo asesor; Germán Enrique Bacca Medina, superintendente Delegado para la Protección de la Competencia; Andrés Escobar, del consejo asesor; Edgardo Villamil Portilla; Pablo Felipe Robledo, superindustria y Mauricio Pérez, del consejo.

de la Corte Suprema de Justicia; el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, y Hernán Eduardo Vallejo González, profesor de los Andes.

Los otros dos miembros del consejo asesor son el exsubdirector de Planeación, Andrés Escobar —designado en 2010 por Álvaro Uribe—, y el decano de Economía de la Universidad Externado, Mauricio Pérez, nombrado en 1999 por Andrés Pastrana.

El consejo se reúne cuando el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca, presenta un informe motivado sobre alguna de las investigaciones que realiza la SIC por violación a la libre competencia; es decir, por acuerdos, carteles o abusos de posición dominante. La idea es que entre todos tomen la decisión sobre el castigo a imponer, más si se tiene en cuenta que la Superindustria puede sancionar hasta con 100.000 salarios mínimos (unos \$61.600 millones) por

violar la libre competencia y si la utilidad obtenida por el infractor es mayor a dicha suma, la multa puede ser de hasta 150% de la utilidad.

Este tema se vuelve crucial ahora que el país aspira a ser aceptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), organismo que cree firmemente que un buen sistema de competencia promueve los precios bajos de productos y servicios en un país.

Aunque el Superindustria no está obligado a acatar la recomendación del consejo, hasta ahora ni Robledo ni sus antecesores han ido en contra de sus sugerencias.

Además del proceso Petro, cuya definición pasó a manos del supersociedades Luis Guillermo Vélez, como superintendente *ad hoc*, pues Robledo se declaró impedido, el consejo tendrá que definir, entre otras investigaciones, si existe un cartel para obstruir las importaciones de azúcar y

repartirse la producción por parte de 12 ingenios, dos empresas del sector y un gremio.

Así mismo, deberán determinar si hay un cartel de precios y repartición geográfica del mercado entre cinco cementeras. Otro tema álgido es si hay abuso de posición dominante por parte de la concesión del Aeropuerto de San Andrés.

En el caso del alcalde de Bogotá, la SIC no solo tienen la facultad de imponerles sanciones millonarias a él y a 10 de sus funcionarios y exfuncionarios, sino que podrá ordenar el desmonte inmediato de su esquema de basuras. Pulso y mucho tecnicismo en esta y las demás decisiones que deberán tomar. **IDI**

**Además del esquema de basuras de Bogotá, están pendientes decisiones sobre azúcar y cemento.**